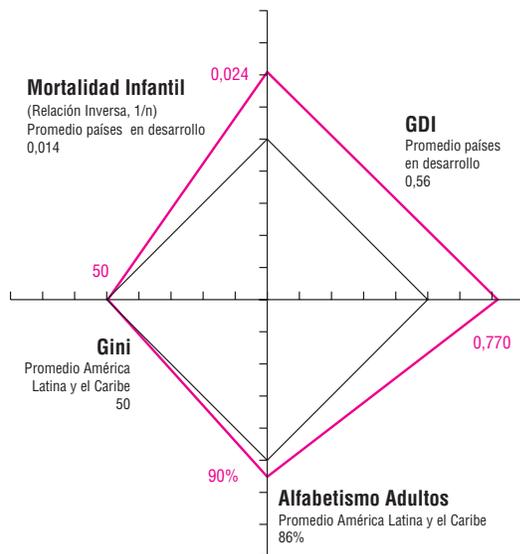


• SUSANA CRUICKSHANK
MARY PURCELL



El Diamante de la Equidad: valores nacionales en terracota comparados con los regionales en azul.

En 1997, hubo importantes avances en términos de equidad política, resultado de una combinación de reformas electorales y una participación ciudadana amplia, determinada a acabar con el partido de Estado y la corrupción que ha invadido a virtualmente todas las instancias públicas

Estos avances, sin embargo, son solo el principio de un largo camino hacia la plena democracia en México. Cuando vemos la situación socioeconómica, nos damos cuenta que allí la desigualdad y la polarización siguen profundizándose, como resultado de la política económica, la falta de una democracia plena y la persistente corrupción.

La polarización se evidencia en muchos ámbitos: entre mujeres y hombres; entre ladinos e indígenas; entre los habitantes de zonas rurales y los de zonas urbanas; entre los grandes empresarios y los pequeños productores; y

MÁS POBRE QUE HACE 15 AÑOS

entre los pocos que están insertos en el mercado internacional y los demás.

LA REFORMA ELECTORAL

Durante 69 años, México había sido gobernado por un solo partido: el Partido de la Revolución Institucional y aunque también había partidos de oposición (con una creciente presencia desde los años ochenta), los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del gobierno, siempre habían sido controlados por éste.

En 1996, después de una serie de negociaciones entre los principales partidos políticos, se aprobó una reforma electoral con la sola votación del PRI. Los partidos de oposición insistían en reformas más comprehensivas, con las cuales el PRI no estaba dispuesto a ceder. Una importante limitación era que enfocaba estrictamente sobre partidos políticos, dejando a la sociedad civil organizada afuera de las consideraciones. Propuestas concretas para construir una democracia más accesible para todos —como el reconocimiento legal del plebiscito y el referéndum— han sido ignoradas hasta ahora. **Hubo un avance con respecto a la equidad entre partidos políticos, pero quedó una brecha grande entre estos y la sociedad civil organizada.**

Aunque las reformas no fueron completas, lograron nivelar el campo político en varios aspectos, incluyendo una mayor equidad en el acceso a los medios de comunicación, el financiamiento público de los partidos y en el nombramiento de funcionarios electorales. En los medios de comunicación del DF, la cobertura para los tres partidos (según el periódico de *La Jornada*), el tiempo dedicado fue prácticamente igualitaria, con 24% al partido del gobierno (PRI) y 25% a cada uno de los dos principales partidos de oposición. En el resto del país, el PRI se quedó con la mayor parte del tiempo en radio y televisión, con 43%. El financiamiento público a los partidos fue de \$1.031.750 pesos (aproximadamente USD133 millones de dólares), cantidad que fue repartida entre los partidos por porcentaje de representación. Esta cantidad fue altamente cuestionada por ser tan alta en comparación con lo destinado al gasto social.

El resultado fue una de las elecciones más limpias en la historia reciente, donde el PRI perdió su mayoría absoluta en la Cámara

de Diputados (aunque en el Senado de la República sigue representado con el 61%), las oficinas del gobernador del Distrito Federal y dos estados en el norte del país. Dos partidos de oposición: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Acción Nacional (PAN), tuvieron importantes avances electorales. Estas elecciones reflejaron un rechazo tajante de la ciudadanía al modelo económico neoliberal del gobierno y a la corrupción que ha infiltrado a la instancia gubernamental. Estas elecciones también son vistas por la misma ciudadanía como el principio de un largo período de democratización del país.

EQUIDAD DE GÉNERO, REGIONAL Y ÉTNICA

Con más equidad entre partidos en el Congreso, viene también un mejoramiento en términos de equidad de género, aunque esto no significa que no siga habiendo desigualdad. Durante la LXVI legislatura de la Cámara (1994–1997) el porcentaje de mujeres que ocupó los curules fue de 12.3% y en la actual legislatura el porcentaje aumentó a 18% (el promedio desde que las mujeres ganaron el derecho a votar en 1953 ha sido de 8%). Sin embargo, en otras áreas de gobierno, las mujeres no tienen este nivel de representación. En 1995, el total de funcionarias gubernamentales es de sólo 6.7%. Las Secretarías de Estado que están al mando de una mujer son solo dos, y estas son las de menor peso político: la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Pesca. Un dato representativo, es el de 1993 en donde tan sólo 2.8% de las presidencias municipales eran mujeres. Estas cifras están mejorando, pero el proceso es lento, considerando la larga historia de desigualdad en el ámbito político. Dos de los partidos principales –el PRI y el PRD– han adoptado la política de integrar un mayor número de mujeres en sus candidaturas, como un mecanismo de compensación temporal. Finalmente, es visible que el rezago de las mujeres es mucho mayor en los puestos de toma de decisión que en el de educación y el empleo.

Los avances en la dimensión político-electoral son muy desiguales entre las regiones del país. Los mayores avances democráticos se encontraron en el Distrito Federal y en zonas de clase media/alta urbanas. **En áreas rurales y en zonas urbanas marginales, las «irregularidades» electorales fueron mucho más comunes, y por eso sus habitantes cuestionan fuertemente la propaganda alrededor de la «nueva democracia» en México.** En las regiones más pobres, las prácticas tradicionales de comprar votos, usar programas gubernamentales para beneficiar a candidatos oficiales, y transferir fondos públicos a las campañas de estos –ahora a un nivel más sofisticado– continúan. Por eso, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha expresado: *«la equidad electoral sigue siendo mucho más real en las zonas urbanas, donde los ciudadanos tienen una*

*mayor oportunidad de informarse y de defender sus intereses legítimamente... así la elección fue técnicamente pareja, pero en un país en el que las diferencias sociales entre campo y ciudad son todavía abismales.»*¹

El estado en donde las elecciones fracasaron fue Chiapas. La situación militarizada y de conflictos sociales del estado obstaculizó cualquier posibilidad de libertad de expresión en las urnas. En algunas zonas, el abstencionismo llegó al 80 por ciento. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decidió no votar por «no reconocer un sistema que no nos reconoce a nosotros». Este es uno de los estados más pobres, con mayor porcentaje de indígenas en todo el país. Es donde los indicadores socioeconómicos son comparables con los de los países más pobres del mundo. En este estado, la inequidad económica, social, política, étnica y religiosa ha llegado a extremos.

Los acuerdos de San Andrés Larrainzar, resultado de una larga negociación entre el Ejército Zapatista y el gobierno, plantean que los pueblos indígenas sean reconocidos jurídicamente en sus propias instituciones sociales, económicas, políticas y culturales; que accedan de manera colectiva al uso de las tierras que ocupan, entendiendo que los dominios de la nación son excepción; y poder preservar y enriquecer sus lenguas y sus ritos.² A la fecha dichos acuerdos no han sido cumplidos porque el gobierno de Ernesto Zedillo ha rechazado los cambios Constitucionales necesarios para su implementación. La intolerancia religiosa en las zonas rurales (sobre todo en el estado de Chiapas) ha sido manejada políticamente, provocando violencia y discriminación. Con el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996, las poblaciones indígenas han sido víctimas de continuas vejaciones por parte del ejército en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Además, agentes del gobierno, en vez de proteger los derechos de la libre expresión religiosa, han apoyado a grupos *priistas* y católicos en sus campañas de violencia contra otros grupos.

LA INEQUIDAD ECONÓMICA

El modelo económico neoliberal impulsado en México desde el principio de los años ochenta, combinado con un gobierno autoritario y una profunda corrupción de las instancias gubernamentales, ha resultado en una polarización económica de la sociedad.

Las políticas gubernamentales, promovidas por la Banca Multilateral de Desarrollo y el gobierno estadounidense, han resultado en un crecimiento insuficiente e insustentable. **De hecho, México es más pobre hoy que hace 15 años.** El Producto Interno Bruto por habitante disminuyó el 7.79% entre 1981 y 1996. Aunque parcialmente esto se pueda atribuir a la crisis económica más reciente (de 1995), eso no explica todo el fenómeno, ya que antes de la crisis en 1994, el PBI por habitante ya había disminuido el 2.51% con respecto al 1981.³ La distribución regional de este PBI es to-

1 CMDPDH, «Guión: Derechos Humanos en México», Junio 1997.

2 Periódico La Jornada, 13 de Enero de 1997.

3 Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, «Espejismo y Realidad: el TLCAN Tres Años Después. Análisis y Propuesta desde la Sociedad Civil», 1997.

talmente desigual: mientras el PBI por habitante en el ámbito nacional era de \$3.030 en 1996, en el estado de Oaxaca fue de \$1.446 y en Chiapas de sólo \$1.227.⁴

Al mismo tiempo que la riqueza total por habitante cae, la distribución de la misma se vuelve cada vez peor. De acuerdo con estimativos recientes, el 10% más pobre de la población recibe sólo el 1% del ingreso nacional, mientras que el más rico recibe el 40%.⁵ Entre 1984 y 1992, el coeficiente Gini para México aumentó en forma significativa de 0,473 al 0,533, lo que ilustra una mayor inequidad en el ingreso.⁶

Según varias fuentes, de 1994 a la fecha el número de mexicanos en condiciones de miseria se amplió de 14 a 21 millones, mientras las 15 familias más ricas del país han aumentado sus fortunas de 16 mil 400 millones de dólares a 27 mil millones. Esta fortuna es el equivalente a 9 por ciento del PBI y sería suficiente para pagar los ingresos durante un año de los 12 millones de trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos.⁷ La bolsa de valores da otro ejemplo de la concentración de la riqueza: inversionistas en la bolsa representan solo 0,15% de la población, pero sus inversiones representan el 25,9% del PBI. Además, las ganancias de este sector huyen cada vez más hacia el extranjero. Durante 1996, los depósitos mexicanos en bancos estadounidenses se incrementaron de \$22,56 a \$27,97 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, estas políticas siguen favoreciendo a los intereses del gran capital sobre los de los mexicanos más desprotegidos. Mientras el gobierno ha decidido destinar más de \$26 mil millones de dólares al rescate de la banca privada (del cual solo 20% cubrió el monto de los deudores de la banca y el 80% el de los accionistas)⁸ y otros \$13 mil millones de pesos al rescate de compañías multinacionales constructoras de autopistas, ha recortado subsidios a la tortilla, la leche y el transporte público para la población de menos recursos. En contraste, durante el 97 destinó 9 por ciento del PBI al gasto social.

Después de que durante más de una década bajaran los coeficientes de pobreza, como consecuencia de una crisis económica y de la imposición del ajuste estructural, desde 1984 los niveles de pobreza crecieron. Entre 1989 y 1994 el coeficiente de pobreza declinó levemente, pero se ha disparado nuevamente a consecuencia de la última crisis económica. De acuerdo a las cifras del gobierno, el nivel de pobreza no ha variado significativamente entre 1996 y 1997, y ha permanecido en la cifra aproximada de 42 millones de personas (aproximadamente el 44% de la población), de las cuales 22 millones viven en estado de extrema pobreza.⁹

La pobreza extrema en México es primariamente (y de manera

creciente) un fenómeno rural. Alrededor del 12% de los 15 millones de hogares urbanos son pobres en extremo, en tanto que el 60% de los 5 millones de hogares rurales se encuentran en ese nivel de pobreza.¹⁰ En las áreas rurales de la parte sur del país, los niveles de pobreza extrema constituyen el triple que el promedio nacional y diez veces el promedio de los estados más ricos. La mayoría de esta gente realiza trabajos agrícolas y, según admite el Banco Mundial, «las políticas macroeconómicas del gobierno han producido un impacto negativo en el sector agrícola»¹¹

Mientras que la pobreza ha crecido, los recursos del gobierno canalizados hacia los programas anti-pobreza han disminuido en términos reales. En el presupuesto de 1995 este ítem cayó un 20%; en 1996 cayó otro 10,5% y en 1997 volvió a caer otro 11,7%. El presupuesto anti-pobreza de hoy alcanza sólo el 60% de lo que era en 1994.¹²

Después de casi tres años de haber accedido al gobierno, la administración Zedillo acaba de lanzar tardíamente su programa para aliviar –no para erradicar– la pobreza. El programa para Educación, Salud y Nutrición (PROGRESA) intentará proveer asistencia directa a unas 400.000 familias pobres. Es uno de los primeros y más importantes programas gubernamentales anti-pobreza que se orienta directamente hacia mujeres y niños y que aborda de forma integral los problemas de la educación, salud y nutrición. En este sentido, esto representa un avance.

Sin embargo, es todavía un programa compensatorio y no aborda los problemas estructurales de la pobreza en México, especialmente la falta de empleo y los salarios extremadamente bajos. Como añadidura, el monto de dinero destinado dista mucho del que se necesita para solucionar las necesidades de las familias pobres. Este año, el programa tiene un presupuesto de 160 millones.

EQUIDAD SOCIAL

SALUD Y NUTRICIÓN

En la medida en que la situación económica se vuelve más polarizada, el problema del acceso a los servicios médicos también empeora en las zonas rurales pobres y aisladas. La cobertura en estas zonas no ha crecido al mismo ritmo que la población y sus necesidades. Los proveedores de servicios médicos más calificados se concentran en áreas donde los salarios y las condiciones de trabajo son mejores, lo que generalmente quiere decir las áreas urbanas. Es

4 Mexican Action Network on Free Trade (RMALC), *Espejismo y Realidad: TLCAN Tres Años Después*, 1997, p. 19.

5 Melgar, Ivonne, *La ambulancia de los pobres*, ENFOQUE, September 21, 1997, p. 4.

6 World Bank, Staff Appraisal Report, *Mexico: Program of Essential Social Services (PROSSE)*, May 25, 1995.

7 Gómez, Salgado, «Aumenta la miseria y se reduce el bienestar social», *El Financiero*, 1 de Septiembre de 1997.

8 Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, «*Espejismo y Realidad: el TLCAN Tres Años Después. Análisis y Propuesta desde la Sociedad Civil*», 1997.

9 *Los Pasivos de la política social*, *El Financiero*, September 21, 1997, p. 46.

10 Melgar, 1997, p. 8.

11 World Bank, Agricultural Development and Rural Poverty Project, (Public Information Document), July 1995.

12 Melgar, p. 8.

importante señalar también que, para resolver los problemas de salud en las zonas rurales, existe un problema cultural, dado que ha habido renuencia a aceptar, por parte de la medicina occidental, la medicina tradicional como una realidad nacional y una alternativa viable en muchas áreas pobres y rurales.

Las mujeres, los niños y la población indígena son los más afectados por esta carencia de servicios médicos. **Un estudio reciente muestra que el 55% de las muertes maternas se da en pueblos de menos de 2500 habitantes.**¹³ En tanto que a nivel nacional el porcentaje promedio de muertes maternas es aproximadamente de 40 por cada 100.000 nacimientos, en Chiapas el porcentaje es de 117.¹⁴ La reproducción sigue constituyendo un riesgo para las mujeres, y se da en un porcentaje directamente proporcional a la ubicación geográfica y al estatus socioeconómico.

La malnutrición es también un síntoma de inequidad en México. De acuerdo a las Comisiones Nacionales de Nutrición, en 1997 aproximadamente 4 millones de familias (o aproximadamente 20 millones de mexicanos) padecieron deficiencias nutricionales. Según los investigadores de la Universidad Iberoamericana, sin embargo, la malnutrición afecta cerca del 40% de la población (alrededor de 38 millones de personas).

Entretanto, los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de México estiman que la tercera parte de la mortalidad infantil es debida a desórdenes biológicos resultantes de la malnutrición.¹⁵ A nivel nacional, se dan 10,5 muertes debidas a malnutrición por cada 100.000 personas, en tanto que en el estado de Chiapas esta cifra es más del doble: 22,3 cada 100.000.¹⁶ Las mujeres en las áreas rurales son particularmente afectadas por la malnutrición dado que ellas tienden a priorizar el proveer alimento a sus hijos y esposos. Se estima que el 29% de las mujeres entre 12 y 49 años de edad tienen un peso más bajo que el normal.¹⁷

EMPLEO/SALARIOS

Durante los últimos 13 años, se crearon sólo 3,2 millones de puestos de trabajos (un promedio de 249.000 por año), mientras la demanda de nuevos puestos llegó a 9,3 millones. Para poder incorporar todos estos trabajadores, la economía debe crecer a 7% por año, lo cual no ha pasado en los últimos 15 años. De los trabajadores que forman parte de la PEA en 1997, un 18,7 por ciento son profesionales y técnicos, mientras el porcentaje de comerciantes, vendedores y trabajadores de la industria suman un total de 67%, dejando el porcentaje restante en áreas de servicios a niveles medios.

En 1997, se comenzó la privatización del sistema de seguro

social, lo cual tendrá implicaciones importantes en términos de equidad. Se elimina un sistema público y colectivo a favor de un sistema privado e individual de pensiones. Nunca más los ahorros por pensiones de los trabajadores con más recursos contribuirán a las pensiones de los trabajadores pobres. **El nuevo sistema ha sido ampliamente rechazado por la población: casi la mitad de los trabajadores se ha negado registrarse con una compañía privada, optando por mantener sus ahorros en el Banco Central del Estado.**

Según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el porcentaje de trabajadores registrados que gana hasta tres veces el salario mínimo se ha incrementado de 65% a 72% entre 1994 y 1997, mientras el porcentaje que gana más de tres salarios mínimos se ha reducido de 35% a 28% durante el mismo período.

Al mismo tiempo, el salario mínimo ha ido perdiendo su valor. Según una investigación de la UNAM, el salario promedio ha perdido 69% de su poder de compra en los últimos diez años. La mitad de los trabajadores ganan dos veces el salario mínimo y en ocasiones menos, lo que significa que no pueden comprar ni la quinta parte de la canasta básica.

Aunque la participación de la mujer en el mercado de trabajo se ha incrementado de una manera importante en los últimos siete años (de 28% de la PEA en 1990 a 38,8% en 1997), las cifras muestran que en tiempos de crisis, es la mujer la que sigue siendo la más vulnerable a los despidos. En 1991, la tasa de desempleo abierto (oficial) para las mujeres era de 3,0% y para los hombres de 2,5%. En 1997, después de la crisis, dichas tasas ascendieron a 4,7% y 3,4% respectivamente.

Las mujeres también siguen recibiendo un salario promedio menor que los hombres aunque realicen un trabajo similar. A pesar de que la Ley Federal del Trabajo, basándose en el artículo 4º Constitucional, establece igualdad en los salarios y en las condiciones de trabajo, en casos extremos, hay una diferencia salarial de hasta 50% por la misma actividad.¹⁸ Además, las mujeres enfrentan una serie de discriminaciones dentro del lugar de trabajo basadas en su sexo, dada la probabilidad de ser despedidas si están embarazadas, es apenas una de ellas.

EDUCACIÓN

El acceso a una educación de calidad en México sigue estando restringido de acuerdo a la clase social, el género, la etnia y la ubicación geográfica. Las cifras oficiales muestran que el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que carece de educación mínima ha aumentado de un 1,8% en 1990 a un 2,6% en 1997.¹⁹ Entretanto, los porcentajes de analfabetismo en Chia-

¹³ *Las Mujeres en la Pobreza*, GIMTRAP—El Colegio de México, Mexico 1997, p. 223.

¹⁴ *Chiapas en Cifras*, CIACH, CONPAZ, SIPRO, Mexico, 1997, p. 31

¹⁵ *Los Pasivos de la política social*, El Financiero, September 21, 1997, p. 46.

¹⁶ *Chiapas en Cifras*, p. 31.

¹⁷ *Las Mujeres en la Pobreza*, p. 233.

¹⁸ Cálculos propios basados en las cifras tomadas de la Encuesta Nacional sobre Educación y Empleo del INEGI Mayo de 1997.

pas (30,12%) y otras zonas pobres de los estados sureños triplican el porcentaje nacional (12,44%).²⁰

El desigual acceso a la educación también representa una carga relativamente más grande para las mujeres, especialmente si viven en áreas rurales o son indígenas. En tanto el porcentaje de mujeres que carecen de educación formal a nivel nacional es 15,3%, en las zonas rurales es 25,4% y entre mujeres indígenas es 45,8%.²¹ Según el INEGI, las tres principales razones para no asistir a la escuela son: la necesidad de trabajar; la falta de una escuela en las cercanías; y la negativa, por parte de la familia, a registrar a su hijo. En el último caso, es en su mayoría a niñas a quienes no se les permite asistir a la escuela. En 1997, el 22,8% de las 4.654.651 mujeres mayores de 12 años que no habían estudiado no lo hizo porque su familia no se lo permitió.

Estas cifras son ilustrativas de la importancia de la ubicación geográfica, la clase social, la etnicidad y el género como determinantes principales en el acceso a la educación y, a partir de ahí, en las futuras oportunidades laborales.

EL CRÉDITO

Entre los problemas más graves que enfrentan productores micro, pequeños y medianos está la falta de crédito accesible. La crisis de 1994–95 resultó en cambios drásticos en las políticas de préstamos entre los bancos comerciales. Como resultado de la crisis de la cartera vencida (la cual llegó a un total de aproximadamente 12 mil millones de dólares), los bancos virtualmente dejaron de prestar a las pequeñas empresas, canalizando sus créditos sólo a las grandes compañías y productores. Mientras tanto, el gobierno poco a poco intenta eliminar a los bancos de desarrollo, que han perdido dinero durante los últimos tres años. Un sector importante de las compañías grandes, con ingresos en divisas, busca crédito en el extranjero, pues su costo (en dólares) resulta ser la mitad del doméstico. **Mientras tanto se estima que sólo el 18% de los productores agrícolas tienen acceso al crédito formal.**

Uno de los sectores que da cuenta de la polarización que sufre el país es el agropecuario, en donde a pesar de que la inversión extranjera mostró crecimiento entre 1985 y 1994 pasando del 0,04% al 0,4% del total, el Producto Interno Bruto agropecuario en 1995 mostró una disminución del 2,5% con respecto al de 1994.²² Dicha inversión, lejos de ayudar a la economía de los pequeños productores ha provocado un abismo entre estos y los

agricultores que cuentan con tierras de riego y buen potencial productivo. Esta misma inversión incrementa la polarización debido a la alta tecnología que caracteriza a un área y de la que carece la otra. Aunque el sector agrícola representa el 23 % de la PEA en México, contribuye con sólo 7% del PBI. En el mismo sentido, vemos una creciente feminización del trabajo en las principales zonas de producción del noreste, que asciende hasta el 50% de los trabajadores, en parte resultado de la mano de obra barata.

En la industria la apertura comercial ha agravado sus problemas estructurales. A pesar de que el sector exportador ha mostrado crecimiento, la exportación de la industria manufacturera muestra una debilidad creciente. Son 300 empresas, la mayoría transnacionales, las responsables del 70% de la exportación total. Las exportaciones primarias son en el período 1990–94 aproximadamente la mitad de las exportaciones (46,68%), y las maquilas el 19,41%. En términos netos sólo ha aumentado el 2,75% de 1990 a 1994. El crecimiento del PBI se basa en gran parte en el crecimiento del sector exportador; pero estas exportaciones tienen cada vez menos contenido nacional, resultando en menos efectos multiplicadores en el resto de la economía. Esto quiere decir que, no obstante las cifras de exportación, la industria nacional muestra un gran rezago frente a la industria transnacional con la cual compete, teniendo consecuencias de desempleo y de amplia polarización entre la gran industria y la planta productiva nacional.

En suma, hemos asistido a algunos avances relativos en lo que respecta a la democracia electoral formal y, en algunas áreas, a un lento progreso en términos de equidad de género. Sin embargo, la inequidad social y económica sigue vigente, e incluso empeora en algunas áreas, especialmente en lo relativo a clase social, etnicidad, género y ubicación geográfica. La existencia en México de leyes que promueven la equidad de ningún modo garantizan su cumplimiento. Se requiere tanto un monitoreo como una presión constantes para asegurar que exista progreso en el futuro.

- EQUIPO PUEBLO es una ONG sobre desarrollo fundada en 1977 que trabaja con organizaciones sociales y movimientos comunitarios en la promoción de la justicia económica, la defensa de los derechos sociales y el avance de la democracia política.

19 INEGI, *Encuesta Nacional Sobre Educación y Empleo*, May 1997.

20 *Militarización y violencia en Chiapas*, Conpaz, Convergencia, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Mexico, 1996, p. 86.

21 INEGI, *Encuesta Nacional Sobre Educación y Empleo*, May 1997.

22 Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, «*Espejismo y Realidad: el TLCAN Tres Años Después. Análisis y Propuesta desde la Sociedad Civil*», 1997.